

RECURSO DE REPOSICIÓN // RADICADO 2020-00078 // DEMANDANTE: CLÍNICA PUTUMAYO vs DEMANDADO: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

GHA NOTIFICACIONES ABOGADOS <notificaciones@gha.com.co>

Mar 8/06/2021 3:13 PM

Para: Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Putumayo - Puerto Asís <jcmpal02ptoasis@notificacionesrj.gov.co>

CC: financieraclinicaputumayo@gmail.com <financieraclinicaputumayo@gmail.com>; juancosoma@hotmail.com

<juancosoma@hotmail.com>; H & A Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; GHA MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ

<mcagudelo@gha.com.co>

 1 archivos adjuntos (771 KB)

RECURSO DE REPOSICIÓN - SURAMERICANA S.A. - 2020-00078.pdf;

Señores

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS

DISTRITO JUDICIAL DE MOCOA

E. S. D.

REF.	PROCESO EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTÍA
RADICACIÓN:	2020-00078
DEMANDANTE:	CLÍNICA PUTUMAYO S.A.S.
DEMANDADO:	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como Apoderado Especial de **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**, como consta en el poder especial que aportó con el presente escrito, comedidamente procedo dentro del término legal, a interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** en contra del Auto calendado con fecha del 12 de agosto de 2020, por medio del cual el Despacho libró mandamiento de pago en favor del Demandante, solicitando desde este momento que tal providencia sea revocada en lo respectivo al mandamiento de pago de 12 facturas y los intereses moratorios de las mismas, de conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos que se esgrimen en el memorial adjunto.

Agradezco confirmar la recepción del documento.

Nota: Conforme a lo dispuesto por el Decreto 806 de 2020 este correo se remite en copia a los demás sujetos procesales.

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA
C.C. 19.395.114 de Bogotá
T.P. No. 39.116 del C.S de la J

Señores

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS

DISTRITO JUDICIAL DE MOCOA

E. S. D.

REF. PROCESO EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTÍA

RADICACIÓN: 2020-00078

DEMANDANTE: CLÍNICA PUTUMAYO S.A.S.

DEMANDADO: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como Apoderado Especial de **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**, como consta en el poder especial que aportó con el presente escrito, comedidamente procedo dentro del término legal, a interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** en contra del Auto calendarado con fecha del 12 de agosto de 2020, por medio del cual el Despacho libró mandamiento de pago en favor del Demandante, solicitando desde este momento que tal providencia sea revocada en lo respectivo al mandamiento de pago de 12 facturas y los intereses moratorios de las mismas, de conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos que se esgrimen a continuación:

I. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

1. LOS DOCUMENTOS SOBRE LOS CUALES SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO NO REUNEN LOS REQUISITOS FORMALES DE UN TÍTULO EJECUTIVO.

El artículo 422 del Código General del Proceso, preceptúa que se pueden demandar ejecutivamente las obligaciones cuando éstas sean expresas, claras y exigibles, provengan del deudor o de su causante, siempre que constituyan plena prueba en su contra. Así:

*“ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, **y constituyan plena prueba contra él**, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que*

señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184 (...)”¹ (Negrilla fuera del texto original)

En relación con las tres características que señala la norma del Código General del Proceso, que deben acompañar a las obligaciones contenidas en los documentos que constituyen título ejecutivo, debe precisarse que la obligación es expresa cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título; es clara, cuando además de expresa aparece determinada en el título, es fácilmente inteligible y se entiende en un solo sentido; y es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o condición. Al respecto, la doctrina ha explicado estas características de la siguiente manera:

"La obligación es expresa cuando aparece manifiesta de la redacción misma del contenido del título, sea que consista ésta en un solo documento o en varios que se complementen formando una unidad jurídica. Faltará este requisito cuando se pretenda deducir la obligación por razonamientos lógicos jurídicos, considerándola una consecuencia implícita o una interpretación personal indirecta (...)

La obligación es clara cuando además de expresa aparece determinada en el título en cuanto a su naturaleza y sus elementos (objeto, término o condición y si fuere el caso su valor líquido o liquidable por simple operación aritmética), en tal forma que de su lectura no quede duda seria respecto a su existencia y sus características.

Obligación exigible es la que debía cumplirse dentro de un término ya vencido, o cuando ocurriera una condición ya acaecida, o para la cual no se señaló término, pero cuyo cumplimiento solo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió, y la que es pura y simple por no someterse a plazo ni a condición (C. C., arts. 1608 y 1536 a 1542)².

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en Sentencia SU 041 del 16 de mayo de 2018 afirmó lo siguiente:

¹ Código General del Proceso. Artículo 22.

² Hernando Devis Echandía. Compendio de Derecho Procesal Tomo III. Vol II. P.589

“Por su parte, las condiciones sustanciales se refieren a la verificación de que las obligaciones que dan lugar a la pretensión de ejecución sean expresas, claras y exigibles. De esta manera, la obligación es expresa cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título; en otras palabras, aquella debe constar en el documento en forma nítida, es decir, debe contener el crédito del ejecutante y la deuda del obligado, sin necesidad de acudir a elucubraciones o suposiciones. Es clara cuando además de ser expresa, aparece determinada en el título, es fácilmente inteligible y se entiende en un solo sentido. Finalmente es exigible cuando puede demandarse su cumplimiento por no estar sometida a plazo o a condición”
(Subrayado y negrilla fuera del texto original) ³

Frente a la condición de que trata la norma y que indica que tales obligaciones claras, expresas y exigibles deben constar en documentos que provengan del deudor o de su causante, debe decirse que en el presente caso, las facturas de venta que se pretenden hacer valer no tienen el carácter de claras, expresas, ni mucho menos exigibles, necesarios para que se configure un título ejecutivo. Las doce (12) facturas de venta por las cuales el Despacho libró mandamiento de pago, no son exigibles a mi representada, toda vez que no cumplen con el lleno de los requisitos que la normativa exige para estos títulos, como procedo a explicar a continuación:

I. LOS DOCUMENTOS NO CONSTITUYEN UNA OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y EXIGIBLE, DADO EL INCUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

La Clínica Putumayo S.A.S. aporta doce (12) documentos que en ningún caso podrán ser considerados como facturas, toda vez que los mismos no cumplen con los requisitos del artículo 774 del Código de Comercio. Específicamente con el numeral 2 del artículo 774 referente a la fecha de recibo de la factura, con identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla. A fin de dar claridad sobre el incumplimiento de este requisito, basta con remitirnos al tenor literal de la norma citada, que indica:

“Artículo 774. Requisitos de la factura. La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621 del presente

³ Corte Constitucional. Sentencia SU 041 del 16 de mayo de 2018. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.

código y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, lo siguientes:

2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre o indicación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley.

Sobre el precitado debe decirse, que en el cuerpo de las doce (12) facturas allegadas con la demanda y por las cuales erróneamente libró mandamiento de pago el Despacho, no se encuentra registro de recibo ni aceptación de las mismas por parte de SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., y por tanto no se puede hacer uso de las mismas como fundamento de una ejecución, toda vez que esta es una regla imperativa que debe estar contenida en el cuerpo de la factura para que pudiese si quiera llegar a considerarse la existencia del título valor. En tal virtud, se observa que ninguna de las allegadas cuenta con firma y fecha de recibidos en el cuerpo original de la factura, de modo tal que las mismas no ostentan la calidad de facturas ejecutables como quiera que se omiten requisitos esenciales de dichos títulos

Desde ya debe advertirse que del estudio realizado a los doce (12) documentos aportados por la demandante, se evidencia que lo único que en ellas se encuentra es la presunta aceptación por parte de los pacientes. Sin embargo, dicha firma no suple la necesidad de dar cumplimiento al numeral 2 del artículo 774, toda vez que la factura debe ser recibida por la entidad obligada al pago, quien es la única que debe aceptarla de manera expresa. De manera qué, no debió librarse mandamiento de pago con base en los documentos aportados con la demanda, toda vez que los mismos no cumplen con los requisitos del artículo 774. Razón suficiente para desestimar todas las pretensiones del Demandante.

II. LOS DOCUMENTOS NO CONSTITUYEN UNA OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y EXIGIBLE, DADO EL INCUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3, ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 3227 DE 2009

Con respecto a las facturas emitidas por la Clínica Putumayo S.A.S., se encuentra en todas las facturas relacionadas en la demanda, la ausencia del requisito establecido en el numeral 3 del artículo 5 del Decreto 3227 de 2009, que dispone:

“Artículo 5°. En caso de que el emisor vendedor del bien o prestador del servicio entregue una copia de la factura al comprador del bien o beneficiario del servicio, en espera de la aceptación expresa en

documento separado o de la aceptación tácita, se aplicarán las siguientes reglas:

3. En el evento en que operen los presupuestos de la aceptación tácita, el emisor vendedor del bien o prestador del servicio deberá incluir en la factura original y bajo la gravedad de juramento, una indicación de que operaron los presupuestos de la aceptación tácita, teniendo en cuenta para el efecto la fecha de recibo señalada en el numeral anterior.”

Del estudio de las facturas allegadas al proceso, es claro que en ninguno de los títulos valores, se da cumplimiento al requisito precitado, puesto que, se observa que la Clínica Putumayo S.A.S. no cumple con lo indicado por la norma en este numeral, en tanto que no realiza bajo gravedad de juramento, la indicación precisa de que en ese título operaron los presupuestos de la aceptación tácita. Requisito que resulta necesario en los términos del mencionado artículo, puesto que es en el título mismo en que el emisor debe consignar bajo la gravedad de juramento que operaron los presupuestos de aceptación tácita. De manera que al no encontrarse cubierto tal requerimiento, no procede el cobro vía mandamiento ejecutivo por estos títulos.

Así las cosas, dado que en el caso concreto no se dio cabal cumplimiento a los requisitos contenidos en el Decreto 3227 de 2009, no resulta exigible para mi representada. Razón por la cual, se solicita al juzgado, revocar el mandamiento de pago por estas facturas, habida cuenta de que se encuentra probado que no cumplieron con el requisito establecido en el numeral 3 artículo 5 del Decreto 3227 de 2009.

III. LA OBLIGACIÓN NO ES EXIGIBLE POR CUANTO NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DEL DECRETO ÚNICO DEL SECTOR SALUD. (Decreto 780 de 2016)

Desde este momento debe advertirse que en el caso de marras nos encontramos frente a presuntas facturas por conceptos de servicio de salud y en tal virtud, debe acudir a los parámetros especiales señalados en la ley por medio de los cuales se regulan aspectos de las facturas que expiden los prestadores de salud y que reglamentan la relación entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago. El Decreto 0780 del 06 de mayo de 2016 “*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Salud*”, dispuso en su artículo 2.5.3.4.10 las indicaciones expresas sobre los soportes de las facturas de prestación de servicios, así:

“Los prestadores de servicios de salud deberán presentar a las entidades responsables de pago, las facturas con los soportes que, de acuerdo con el mecanismo de pago, establezca el Ministerio de Salud y Protección Social. La entidad responsable del pago no podrá exigir soportes adicionales a los definidos para el efecto por el Ministerio de Salud y Protección Social”.

Así las cosas, en el entendido del precitado, es clara la obligación del prestador del servicio de salud, de allegar junto a las facturas los soportes que ha establecido el Ministerio de Salud y que mencionaré más adelante, ahora bien, dentro del plenario no se observa que la parte Demandante haya cumplido lo previsto en el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Salud.

Sobre el particular, es necesario traer a colación el artículo 167 del Código General del Proceso, el cual a su tenor dispone:

“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.

Los hechos notorios y las afirmaciones o **negaciones indefinidas no requieren prueba** (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Téngase en cuenta que las negaciones indefinidas son aquellas que ni indirecta o implícitamente conllevan ninguna negación opuesta, que no sólo son indeterminables en el tiempo y en el espacio, sino que, en la práctica, no requieren de prueba tal y como lo establece el artículo 167 del Código General del Proceso. Al respecto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, expediente (2000-133) mediante Sentencia del 28 de febrero de 2007 dispuso lo siguiente:

*“Es decir, existe un deber ex lege de comunicar hechos que inciden en la estructura y dinámica del riesgo previamente amparado. En el caso del artículo 1061, en lo que respecta a su origen o fuente, al mismo tiempo que a su teleología, la prestación es enteramente diferente, puesto que **la garantía constituye una promesa de conducta (hacer o no hacer), o de afirmación o negación que otorga el tomador o asegurado en relación con la existencia de un determinado hecho, lo que supone, invariablemente, una declaración ex voluntate y, por ende, de claro contenido negocial, la que en tal virtud no se puede inferir o presumir, menos si se tiene en cuenta las drásticas secuelas derivadas de su inobservancia o quebrantamiento.** Ello explica que sea menester que aflore o se evidencie “...la intención inequívoca de otorgarla” (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

Asimismo, respecto de las negaciones indefinidas, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“(...) que éstas se dividen en definidas e indefinidas, siendo las primeras aquéllas que tienen por objeto hechos concretos, limitados en tiempo y lugar, que presuponen la existencia de otro hecho de igual naturaleza, el cual resulta afirmado implícita o indirectamente, las segundas, en cambio, no implican, ni indirecta ni implícitamente, la afirmación de hecho concreto y contrario alguno.

Para las [definidas], el régimen relacionado con el deber de probarlas continúa intacto ‘por tratarse de una negación apenas aparente o gramatical’; las [indefinidas], ‘son de imposible demostración judicial, desde luego que no implican la aseveración de otro hecho alguno’, de

suerte que éstas no se pueden demostrar, no porque sean negaciones, sino porque son indefinidas (...)"⁴

Así entonces, dentro del presente asunto, nos encontramos ante una negación indefinida, en el sentido de que en el presente asunto no se logra acreditar el cumplimiento de las cargas contenidas en el artículo 2.5.3.4.10, que establece expresamente que las facturas deben allegarse con los correspondientes soportes establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Dichos soportes, se encuentran expresamente estipulados en el Artículo 2.6.1.4.2.20 del mismo Decreto, además de disponer con total claridad, que para realizar la solicitud de pago de los servicios prestados a víctimas de accidentes de tránsito, los prestadores de los servicios de salud deben radicar los soportes correspondientes a dichas facturas. Así:

“Artículo 2.6.1.4.2.20 Documentos exigidos para presentar la solicitud de pago de los servicios de salud. Para elevar la solicitud de pago de los servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito, de eventos catastróficos de origen natural, de eventos terroristas y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga, los prestadores de servicios de salud deberán radicar ante el Ministerio de Salud y Protección Social, o la entidad que se defina para el efecto o ante la aseguradora, según corresponda, los siguientes documentos:

1. Formulario de reclamación que para el efecto adopte la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y de Protección Social, debidamente diligenciado. El medio magnético deberá contar con una firma digital certificada.

2. Cuando se trate de una víctima de accidente de tránsito:

2.1. Epicrisis o resumen clínico de atención según corresponda, documento que debe contener los datos específicos señalados en los artículos 2.6.1.4.3.5 y 2.6.1.4.3.6 del presente decreto.

⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 13 de julio de 2005, exp. 00126 citada el 20 de enero de 2006, exp. 1999-00037

2.2. Los documentos que soportan el contenido de la historia clínica o el resumen clínico de atención señalados en la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto.

3. Cuando se trate de víctimas de eventos catastróficos de origen natural o de eventos terroristas:

3.1. Epicrisis o resumen clínico de atención según corresponda, documento que debe contener los datos específicos señalados en los artículos 2.6.1.4.3.5 y 2.6.1.4.3.6 del presente decreto.

3.2. Los documentos que soportan el contenido de la historia clínica o el resumen clínico de atención señalados en la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto.

3.3. Certificado emitido por el consejo municipal de gestión del riesgo, en el que conste que la persona es o fue víctima de uno de los eventos mencionados.

4. Original de la factura o documento equivalente de la IPS que prestó el servicio, que debe contener como mínimo la información señalada en el artículo 2.6.1.4.3.7 del presente decreto.

5. Cuando se reclame el valor del material de osteosíntesis, factura o documento equivalente del proveedor de la IPS.”⁵(Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Es evidente que en el presente caso no se encuentran los soportes de las doce (12) facturas por las cuales el Despacho libró mandamiento de pago, aún cuando tales documentos requeridos por el precitado artículo 2.6.1.4.2.20, resultan completamente necesarios para el pago según los preceptos del artículo 2.5.3.4.10. Por tal motivo, las obligaciones derivadas de los títulos que pretende hacer valer la demandante no son exigibles, dado que no se cumplió con las cargas dispuestas en la normativa referenciada. En consecuencia, si las facturas no están acompañadas de los respectivos soportes, no se genera obligación en cabeza de SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

⁵ Decreto No. 780 de 2016.

IV. LA SOLA AFIRMACIÓN DEL DEMANDANTE DE NINGUNA MANERA PUEDE CONSTITUIR PLENA PRUEBA DE UN SUPUESTO FÁCTICO.

Una vez expuesto el numeral anterior y bajo el entendido de que en el presente caso no se encuentran los soportes de las doce (12) facturas por las cuales el Despacho libró mandamiento de pago, aún cuando tales documentos resultan necesarios para el pago según los términos del artículo 2.5.3.4.10, es necesario indicar que en el proceso no existe prueba, así como tampoco se acompañó prueba en la factura, del supuesto servicio prestado a las víctimas de accidentes de tránsito, que se pretenden cobrar en este proceso, por lo que no sería factible cobrar dichas facturas si no se ha logrado acreditar el derecho a favor del demandante

Frente a este particular, resulta de suma importancia citar una providencia del Tribunal Superior de Bogotá, que es clara al explicar que la sola afirmación del Demandante de ninguna manera puede constituir plena prueba de un supuesto fáctico. La citada providencia explica lo siguiente:

*“Y es que pasó inadvertida la Superintendencia Financiera de Colombia que conforme lo establecen el artículo 167 del C.G.P., le correspondía a la parte demandante probar los supuestos fácticos en los cuales fundamenta sus pretensiones, **en tanto que la sola afirmación de quien lo alega no es constitutiva de plena prueba del hecho o acto, ya que a nadie le es dado el privilegio de que su mero dicho sea prueba suficiente de lo que afirma**, tal como lo ha precisado la H. Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil:*

*“...**es verdad que, con arreglo al principio universal de que nadie puede hacerse su propia prueba, una decisión no puede fundarse exclusivamente en lo que una de las partes afirma a tono con sus aspiraciones. Sería desmedido que alguien pretendiese que lo que afirma en un proceso se tenga por verdad, así y todo sea muy acrisolada la solvencia moral que se tenga**. De ahí que la Corte Suprema de Justicia haya dicho en un importante número de veces... que ‘es principio general de derecho probatorio y de profundo contenido lógico, **que la parte no puede crearse a su favor su propia prueba**. Quien afirma un hecho en un proceso tiene la carga procesal de demostrarlo con alguno de los*

medios que enumera el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, con cualesquiera formas que sirvan para formar el convencimiento del Juez. Esa carga... que se expresa con el aforismo onus probandi incumbit actori no existiría, si al demandante le bastara afirmar el supuesto de hecho de las normas y con eso no más quedar convencido el Juez”⁶ (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En otras palabras, la jurisprudencia del Tribunal Superior de Bogotá, afincada en una tesis desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, se ha decantado en el sentido de explicar que el mero dicho de una parte no basta para probar un supuesto de hecho. En tal virtud, aterrizando tal teoría al caso concreto, es dable afirmar que existió un yerro al haber librado el mandamiento de pago, debido a que tal actuación se adelantó con el mero dicho del Demandante, sin que existiera una prueba conducente, pertinente y útil, a partir de la cual se acrediten debidamente las circunstancias fácticas expuestas en el libelo genitor, así como tampoco del servicio prestado a mi representada. Frente al particular, la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante Auto del 15 de marzo de 2006, Exp. 30013 afirmó lo siguiente:

“(...) según esa disposición, las obligaciones ejecutables requieren de demostración documental en la cual se advierta la satisfacción de las condiciones tanto formales, como de fondo. Las primeras condiciones miran a que se trate de documento o documentos que conformen unidad jurídica; que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o por árbitro, etc. Las segundas condiciones, de fondo, atañen a que de ese o esos documentos, con alguno de los orígenes indicados en la norma, aparezca a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado una “obligación clara, expresa y exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero”⁷

Así las cosas, no se está dando cumplimiento a los requisitos de las obligaciones ejecutables toda vez que no es clara de dónde proviene o de qué se deriva la factura, razón por la cual, solicito nuevamente al Despacho, que se sirva revocar el mandamiento de pago librado el 12 de agosto de 2020 en contra de SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

⁶ Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala Séptima. Sentencia del 24 de agosto de 2020. Rad. 2018-0034-01.

⁷ Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 15 de marzo de 2006. Expediente 30013

Habida cuenta de que no existen soportes de la prestación efectiva de los servicios y no pueden entenderse probados con el mero dicho del demandante.

V. LOS DOCUMENTOS POR LOS QUE SE LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO NO SON CLAROS EXPRESOS Y EXIGIBLES PUESTO QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL DECRETO 56 DEL 2015 FRENTE AL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

La parte demandante presentó ante su Despacho, demanda ejecutiva basada en la existencia de diversas facturas cambiarias de venta, libradas con ocasión de la supuesta prestación de servicios médicos y quirúrgicos a víctimas de accidentes de tránsito, atendiendo múltiples contratos de seguro obligatorio contra accidentes de tránsito SOAT. Para acreditar la mencionada existencia del título valor, el extremo activo de este litigio aportó al Despacho doce (12) facturas de venta cuyo supuesto origen es el suministro de servicios médicos por concepto del SOAT, prestados por parte de la CLÍNICA PUTUMAYO S.A.S. a usuarios de SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

No obstante, se deberá tener en cuenta por el Juzgador que de los documentos aportados se desprende la inexistencia del pretendido título ejecutivo que lo habilite para librar mandamiento de pago en contra de mi prohijada; ello en razón del artículo 26 del Decreto 56 del 2015, por el cual se establecen las reglas para el funcionamiento de la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), y las condiciones de cobertura, reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas o los demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga, por parte de la Subcuenta ECAT del Fosyga y de las entidades aseguradoras autorizadas para operar el SOAT.

El artículo 26 del Decreto 56 del 2015 señala con claridad cuáles son los documentos exigidos para presentar la solicitud de pago de los servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito, así:

“Artículo 26.- Documentos exigidos para presentar la solicitud de pago de los servicios de salud. Para elevar la solicitud de pago de los servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito, de eventos catastróficos de origen natural, de eventos terroristas y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su

calidad de Consejo de Administración del Fosyga, los prestadores de servicios de salud deberán radicar ante el Ministerio de Salud y Protección Social, o la entidad que se defina para el efecto o ante la aseguradora, según corresponda, los siguientes documentos:

1. Formulario de reclamación que para el efecto adopte la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y de Protección Social, debidamente diligenciado. El medio magnético deberá contar con una firma digital certificada.

2. Cuando se trate de una víctima de accidente de tránsito:

2.1. Epicrisis o resumen clínico de atención según corresponda, documento que debe contener los datos específicos señalados en los artículos 31 y 32 del presente decreto.

2.2. Los documentos que soportan el contenido de la historia clínica o el resumen clínico de atención señalados en la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto.

3. Cuando se trate de víctimas de eventos catastróficos de origen natural o de eventos terroristas:

3.1. Epicrisis o resumen clínico de atención según corresponda, documento que debe contener los datos específicos señalados en los artículos 31 y 32 del presente decreto.

3.2. Los documentos que soportan el contenido de la historia clínica o el resumen clínico de atención señalados en la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto.

3.3. Certificado emitido por el consejo municipal de gestión del riesgo, en el que conste que la persona es o fue víctima de uno de los eventos mencionados.

4. Original de la factura o documento equivalente de la IPS que prestó el servicio, que debe contener como mínimo la información señalada en el artículo 33 del presente decreto.

5. Cuando se reclame el valor del material de osteosíntesis, factura o documento equivalente del proveedor de la IPS (...)"

En este mismo sentido, el artículo 31 del mencionado Decreto, estipuló:

“Artículo 31.- Contenido de la Epicrisis. Para los efectos del presente decreto la epicrisis debe contener como mínimo los siguientes datos:

1. Primer nombre y primer apellido del paciente.
2. Tipo y número de identificación y/o número de historia clínica.
3. Servicio de ingreso.
4. Hora y fecha de ingreso.
5. Servicio de egreso.
6. Hora y fecha de egreso.
7. Motivo de consulta.
8. Enfermedad actual, información que debe contener:
 - 8.1. La relación con el evento que originó la atención.
 - 8.2. Relación de recibido del paciente en caso de ingreso por remisión de otra IPS.
9. Antecedentes.
10. Revisión por sistemas relacionada con el motivo que originó el servicio.
11. Hallazgos del examen físico.
12. Diagnóstico de ingreso.
13. Conducta: incluye la solicitud de procedimientos diagnósticos y el plan de manejo terapéutico.
14. Cambios en el estado del paciente que conlleven a modificar la conducta o el manejo.
15. Resultados de la totalidad de procedimientos diagnósticos y todos aquellos que justifiquen los cambios en el manejo o en el diagnóstico.
16. Justificación de indicaciones terapéuticas cuando estas lo ameriten.
17. Diagnósticos de egreso.
18. Condiciones generales a la salida del paciente que incluya incapacidad si la hubiere.

19. *Plan de manejo ambulatorio.*
20. *En caso que el paciente sea remitido a otra IPS, relación de la remisión.*
21. *Primer nombre y primer apellido, firma y número de registro del médico que diligencie el documento.*

Parágrafo 1°. Los requisitos contenidos en el presente artículo aplican solamente a las epicrisis que se presenten como soporte de las reclamaciones por servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente decreto y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán cumplir con su contenido obligatoriamente para el pago de los servicios de salud correspondientes.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y Protección Social revisará el contenido de la epicrisis aquí señalado y lo modificará en caso de considerarlo necesario (...)"⁸

Resulta menester señalar, que de los documentos aportados por la parte demandante Demandante, no se evidencia constancia de que fueron radicados atendiendo a los requisitos anteriormente esgrimidos, ni mucho menos se aportan a la demanda en cuestión, razón por la cual, resulta improcedente el reconocimiento de estos valores vía mandamiento de pago, cuando es claro que no existe aún título ejecutivo, por no acreditarse la prestación de estos servicios bajo los presupuestos de los artículos precitados.

Adicionalmente, jurisprudencia reciente sobre el particular ha establecido que en tanto el asunto en discusión se trate de facturas generadas por la prestación de servicios de salud del Régimen de Seguridad Social, estas no se rigen exclusivamente por lo indicado en la ley comercial, sino que deben estar sujetos a las normatividades especiales que se han expedido sobre el asunto. Específicamente, en sentencia del 31 de mayo de 2021 el Juzgado Cincuenta y Siete (57) Civil Municipal hizo expresa referencia a un caso análogo al que aquí se discute, en el Despacho revocó el auto por el que libró mandamiento de pago contra La Equidad Seguros Generales, al encontrar que por tratarse de facturas derivadas de la prestación de servicios de salud. No prestan mérito ejecutivo por la ausencia de soportes de prestación de servicios de salud que alegan los Demandantes. Al respecto, la mentada sentencia indicó:

⁸ Decreto 56 de 2015. Artículo 32.

*“Teniendo en cuenta lo anterior, ha de precisarse que, al tratarse de facturas generadas como consecuencia de la prestación de servicios de salud del Régimen de Seguridad Social, estas no se rigen exclusivamente por la mentada normatividad comercial, sino que deben estar sujetos a la normatividad especiales que regulan el tema y estén vigentes. **Luego se evidencia que las facturas aquí presentadas para su cobro no presentan mérito ejecutivo, pues contrario a lo advertido por el apoderado judicial de la parte actora, deben presentarse todos los soportes de prestación de servicios de salud** que demanda en la Ley 1122 de 2007, el Decreto 4747 de 2007, la Resolución 3047 de 2008. El Decreto 56 de 2015 y el Decreto 780 de 2016 a efecto de completar el título ejecutivo que será exigible por vía judicial, **ya que por sí sola el cambial, no puede ser ejecutado como un título valor autónomo**”⁹*

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el mandamiento de pago que su Despacho libró se basa en documentos que por sí solos no ostentan la calidad de título ejecutable, sino que deben ser considerados como un título claro, expreso y exigible en tanto no cumplen con los requisitos que ha establecido la ley para esos fines. De tal suerte, que no le queda otro camino al Despacho sino revocar el mandamiento de pago que se libró el 12 de agosto de 2020 y en su lugar, denegar las pretensiones del Demandante por no dar cabal cumplimiento a las disposiciones normativas especiales que regulan la materia.

2. EL PROCESO EJECUTIVO NO ES LA VÍA PROCESAL ACERTADA PARA RESOLVER EL OBJETO DE LA LITIS.

El derecho procesal consagra diversas clases de procesos dependiendo del objeto de la controversia, tales como declarativos, ejecutivos, liquidatarios, etc. Así, los procesos declarativos o de conocimiento son aquellos en los que se acude al juez para que, previo conocimiento de hechos y pruebas adopte una declaración, mientras que los ejecutivos el demandante acude ante el juez para hacer valer un derecho que es cierto e indiscutible, con base en un documento que contiene una obligación clara, expresa y exigible. Es decir, que en éste último se parte de la certeza formal respecto de la existencia de un derecho, así como de su titular, y por cuyo conducto se pretende hacer exigible.

⁹ Sentencia del 31 de mayo de 2021. Juzgado 57 Civil Municipal de Bogotá. Expediente 2019-00648

Como es bien sabido, a efectos de estar facultado para iniciar un proceso ejecutivo, es necesario acreditar la existencia del derecho que se busca exigir mediante la presentación de un documento proveniente del deudor y que contenga una obligación clara, expresa y exigible. De manera que, ante la ausencia de cualquiera de los requisitos del título ejecutivo, es evidente que se pone en tela de juicio la certeza del derecho y el trámite que se debe dar a la controversia será dentro de un proceso declarativo mediante el cual se determine si el que pretende ejecutar es titular del derecho que reclama.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia mediante providencia del 21 de mayo de 2019 consejero ponente Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, señaló lo siguiente:

“Explicado de otra forma, sin título no hay ejecución porque la ley (hoy la regla 422 del Código General del Proceso, antes la 488 del Código de Procedimiento civil) exige para promover ese juicio de responsabilidad civil por el incumplimiento de una obligación, que el acreedor satisfaga, primero, ese específico estándar de prueba”¹⁰.

En el caso objeto de estudio, es evidente que el documento que se presentó como título ejecutivo y con base en el cual se promovió la presente acción adolece de los requisitos para ser considerado como tal, de manera que, atendiendo a todos los argumentos esgrimidos a lo largo del presente recurso, la controversia necesariamente debe ser conocida en un proceso declarativo, pues el ejecutante en realidad no es titular de un derecho cierto, o por lo menos, se encuentra en tela de juicio tal situación jurídica.

Por todo lo expuesto, no puede considerarse que en el presente caso el ejecutante cuenta con un derecho cierto e indiscutible que permita exigir su cumplimiento mediante un proceso ejecutivo, de manera que deberán someter la controversia a un proceso declarativo. En consecuencia, debe revocarse el mandamiento ejecutivo y rechazarse de plano la demanda.

II. SOLICITUDES

Conforme a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, respetuosamente solicito respetuosamente solicito lo siguiente:

¹⁰ CSJ. AC1837-2019. Radicación n.º 11001-02-03-000-2019-01290-00. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Página 17 de 18

1. Que se **DECLARE** que no existe una obligación clara, expresa y exigible en los términos del artículo 422 del CGP, a favor del demandante y a cargo de mi representada SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
2. Como consecuencia de lo anterior, que se **REVOQUE** el mandamiento ejecutivo de fecha del 12 de agosto de 2020 y en su lugar,
3. Se **RECHACE** de plano la demanda ejecutiva presentada por la CLÍNICA PUTUMAYO S.A.S. en contra de mi procurada, por cuanto el título con base en el cual se promovió la presente acción no contiene una obligación clara, expresa ni exigible y en consecuencia, la controversia necesariamente debe ser ventilada en un proceso declarativo

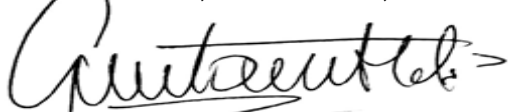
III. **ANEXOS**

1. Poder Especial.
2. Certificado de existencia y representación legal de Seguros de Vida Suramericana S.A
3. Sentencia del 31 de mayo de 2021, proferida por el Juzgado cincuenta y siete (57) Civil Municipal de Bogotá.

IV. **NOTIFICACIONES**

- El suscrito, en la Carrera 11A No. 94A-56, Oficina 402 de la ciudad de Bogotá y en la dirección de correo electrónico notificaciones@gha.com.co
- Mi procurada, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. en la dirección de notificación judicial para la ciudad de Bogotá, en la Cll 64 Norte # 5 BN- 146 Oficina 101 C (Cali – Valle) y notificaciones electrónicas en la dirección de correo electrónico notificacionesjudiciales@suramericana.com.co
- El Demandante recibirá notificaciones en la dirección que relaciona en su libelo.

Del Señor Juez, Atentamente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

Señores

JUZGADO SEGUNDO (02) CIVIL MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS.

Distrito Judicial de Mocoa

E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR.

DEMANDANTE: CLÍNICA PUTUMAYO S.A.S.

DEMANDADO: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

RADICACIÓN: 2020-00078-00

ASUNTO: PODER ESPECIAL

MARÍA ALEJANDRA ZAPATA PEREIRA, mayor de edad, vecina y residente en la ciudad de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.151.935.338, en mi calidad de Representante Legal Judicial de **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**, comedidamente manifiesto que en esa calidad confiero poder especial, amplio y suficiente al doctor **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, abogado en ejercicio, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía N° 19.395.114 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, con la siguiente dirección de correo electrónico inscrita en el Registro Nacional de Abogados notificaciones@gha.com.co, para que actuando en nombre de dicha sociedad la represente en el proceso de la referencia, se notifique del auto admisorio de la demanda y/o del llamamiento en garantía, del mandamiento de pago, los conteste, interponga recursos, descorra el traslado de los que interponga la parte actora o los demás convocados, proponga excepciones, solicite la práctica de las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del proceso, y en general, para realice todas las actuaciones inherentes a su calidad.

El apoderado queda facultado para notificarse, recibir, desistir, conciliar, transigir, reasumir, objetar el juramento estimatorio y en general para realizar todas las acciones necesarias e indispensables para el buen éxito del mandato a su cargo.

Ruego, señor juez, conferirle personería para actuar en los términos y para los fines del presente mandato.

Del señor Juez,

Acepto,



**MARÍA ALEJANDRA ZAPATA
PEREIRA**

Representante Legal

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA
ÁVILA**

C.C. 19.395.114 de Bogotá

T.P. 39.116 del C.S.J.

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL**

Bogotá D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Referencia 11001 40 03 057 2019 00648 00

Se reconoce a la sociedad G. HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S., para actuar como apoderado general de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, según consta en su registro mercantil, quien actuara a través de su representante legal.

Se decide el recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial de la parte ejecutada la Equidad Seguro Genérales Organismo Cooperativo - La Equidad Generales-, contra el auto de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020), mediante el cual se libró mandamiento de pago.

De conformidad con el artículo 318 del C.G.P., el citado recurrente en síntesis indicó, que las 58 facturas que se pretenden recaudar de forma ejecutiva no son claras, expresas y exigibles, puesto que no cumplen con el numeral 3, artículo 5 del Decreto 3227 de 2009, ya que la sociedad ejecutada omitió sentar juramento acerca de la aceptación tácita de los referidos títulos valores. De igual forma preciso, que tampoco se cumple con las exigencias previstas en el Decreto 780 de 2016. como quiera que no se allegó con los cambiales los soportes que ha establecido el Ministerio de Salud y que trata los artículos 2.5.3.4.10 y 2.6.1.4.2.20 de la normatividad en cita, y el artículo 26 del Decreto 56 del 2015 para solicitar el pago de los servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito. En el mismo sentido se evidencia que dichas facturas son insuficientes para hacer efectivo el cobro compulsado, por ende, debe incoarse otra clase de acción donde se declare que en efecto se adeuda lo referido, pues no se logró constituir el título ejecutivo. Finalmente indico que las facturas Nos. 4000928877, 4000931465, 4000940751, 4000941211, 4000959376, 4000983842, 4000985583, 4000988707, 4000987164, 4000988038, 4001005216, y 4001010118 no pueden ser ejecutables, puesto que ha transcurrido tres años desde que se hicieron exigible, operando el fenómeno prescriptivo.

A su turno, la Fundación Oftalmológica de Santander Foscal, indicó que no son de recibido los argumentos de la parte pasiva, puesto que las facturas fueron aceptadas al momento de ser recibidas por la sociedad ejecutada, sin que esta haya procedido a devolverlas o rechazarlas, y tampoco dio cumplimiento a lo citado en el artículo 23 del Decreto 4747 de 2007 frente al desglose de estas. Agregando que las facturas aducidas no son títulos ejecutivos complejos, por tanto, no se requiere de la presentación de ningún otro documento para poder ejecutarlas, pues los soportes referentes a la prestación del servicio que trata el Decreto 4747 de 2007, no deben ser presentados ante el juez civil, sino ante el deudor para exigir su pago. De igual forma no está llamada a prosperar, la alegación referente a que debe adjuntarse la documental prevista en el Decreto 780 de 2016, pues se itera que estas fueron presentadas ante la entidad demandada y no se cumplió con el pago oportuno, lo que dio paso a que se invocara su ejecución. Por otro lado, señalo que resulta totalmente desacertado alegar que las facturas presentadas para su cobro están prescritas, ya la demanda se presentó antes de que se configurara el fenómeno prescriptivo. Finalmente itero que los títulos valores allegados prestan merito ejecutivo, y por ende, es procedente su recaudo por esta vía.

CONSIDERACIONES

Es indudable que para acceder a esta clase de cobro compulsivo debe contarse con un título que denote la condición de ejecutivo, es decir, que contenga una obligación clara, expresa y exigible proveniente del deudor o su causante, según el mandato previsto en el artículo 422 del Código General del Proceso, condición que comparten los títulos valores siempre que cumplan las exigencias previstas en el artículo 621 del estatuto mercantil.

Consagra la Ley comercial que la factura de venta será la que reúna los requisitos establecidos en el artículo 774 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3 de la Ley 1231 de 2008, a saber: i. la fecha de vencimiento del cambial, en observancia a las previsiones del 673 ídem, *“en ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendarios siguientes a la emisión”*; ii. La indicación de la data en que se entregó, el nombre, o identificación, o firma de aquel que sea el encargado de recibirla; y iii. la constancia emitida en la factura original respecto a sus condiciones de pago por parte del emisor, vendedor, o prestador del servicio, *“la misma obligación está sujetos los terceros a quienes se haya transferido la factura”*.

A su turno, el artículo 773 modificado por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, prevé la aceptación de la factura bajo dos escenarios, el primero de ellos, bajo la modalidad de la aceptación expresa, surgiendo cuando el comprador, o beneficiario del servicio de manera personal o por quien haya sido el encargado de recibir la mercancía o el servicio prestado en las dependencias de este, imprima expresamente su aceptación y deje constancia del recibido del producto (mercancía o servicio), ya sea en el caratular, documento adherido, o guía de transporte (física o electrónica), donde deberá indicar fecha, nombre, identificación o firma de quien recibe; y la segunda, aceptación tácita, tiene cabida cuando dentro del lapso de 3 días hábiles siguientes a su recepción, el comprador, o beneficiario del servicio, no sienta reclamación alguna de su contenido, mediante su devolución o de los documentos que lo acompañan, o reclamación escrita enfilada en contra del legítimo tenedor del título o emisor. En caso en que el vendedor o prestador del servicio ponga a circular el título valor mediante endoso, deberá dejar juramento de que *“el comprador o beneficiario del servicio no manifieste expresamente la aceptación o rechazo de la factura”*.

Respecto a este punto la Corte Suprema de Justicia en providencia No. STC290-2021 del 27 de enero de 2021, ha precisado que:

“...La norma transcrita plantea dos escenarios para la aceptación: expresa y tácita. La primera acaece cuando la persona que recibe unas mercancías o servicios hace constar explícitamente su aceptación en la factura mediante su firma y el uso de la palabra “acepto” u otro equivalente. La segunda hipótesis deviene de actos implícitos del obligado cambiaria o de sus dependientes, por ello la misma disposición enseña que “(...) el comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida representación por razón de la persona que reciba la mercancía o el servicio en sus dependencias, para efectos de la aceptación del título valor”.

(...) Así las cosas, la obligación cambiaria deviene su suerte misma de la aceptación para tornar en auténtico título valor que obliga al aceptante. Ello ocurre en el caso del comprador o el beneficiario del servicio a quien solo se le da un plazo prudencial de tres días para revocar la aceptación

porque, de lo contrario, queda irremediablemente sometido a su suerte como principal obligado, aspecto que aparece probado en el ejecutivo objeto de acción, como más adelante se expondrá...”¹

Frente a las facturas de servicio de salud, a dé acudir a los parámetros especiales señalados en la Ley 1122 de 2007 y el Decreto 4747, por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables de dicho pago, y se dictan otras disposiciones. En su artículo 21, se establece que junto con las facturas a de presentarse los soportes de prestación de servicios de salud que establece el Ministerio de la Protección Social, para que éstas sean pagadas en oportunidad. Respecto a la devolución de las facturas, se consagro el manual de glosas, donde se prevé, que las entidades responsables del pago podrán devolver las mismas si estas no se ajustan a los parámetros que regulan el tema, el cual se surtirá al treinteno día siguiente de haber radicado la factura y sus soportes, y a su vez, el prestador del servicio cuenta con el termino de quince días para subsanar los defectos enunciados, o indicar que no hay irregularidad que ajustar, la que será atendida a los diez días siguientes de su radicación, y a los cinco días siguientes se emitirán los pagos respectivos (artículos 22 y 23).

La corporación en cita, en providencia STC3056-2021 del 24 de marzo de 2021, señalo que:

“...Dicho lo anterior, dejó por sentado que tratándose de la ejecución de obligaciones generadas por la prestación de servicios de salud, y de conformidad a la normatividad especial que rige la materia (Ley 1122 de 2007), Decreto 4747 de 2007, Decreto 3990 de 2007, Resoluciones Nos. 3047 de 2008 y 416 de 2009, Ley 1438 de 2011, Decreto 056 de 2015, Decreto 780 de 2016), debe «conformarse» debidamente el título complejo que permita de manera inequívoca librar la orden de apremio, «por estar estructurados por una pluralidad de documentos que en conjunto son los que prestan mérito ejecutivo», ultimando que, «de acuerdo con la citada reglamentación, las instituciones prestadoras del servicio de salud están habilitadas para exigir el reembolso de los gastos generados por la prestación de este servicio a la entidades responsables del pago, pero para ello fuera de librar las facturas deberán cumplir con el requisito de radicarlas junto con los soportes definidos en las normas especiales que regulan este trámite de pago, de donde surge para la receptora de tales documentos la obligación de una revisión preliminar, teniendo la oportunidad para realizar devoluciones o glosas dentro del tiempo otorgado. Luego entonces, la factura acompañada de la cuenta de cobro que no contenga glosas o devoluciones se tiene como debidamente presentada y aceptada, pero las que sí se vieron afectadas de estas circunstancias particulares, su presentación para el cobro quedará sujeto a las resultas del agotamiento de ese trámite administrativo previsto en las normas anteriormente citadas, dado que delimitan el alcance de la obligación y determinan la exigibilidad de la misma»...”²

Teniendo en cuenta lo anterior, ha de precisarse que, al tratarse de facturas generadas como consecuencia de la prestación de servicios de salud del Régimen de Seguridad Social, estas no se rigen exclusivamente por la mentada normatividad comercial, sino que deben estar sujetos a la normatividad especiales que regulan el tema y estén vigentes. Luego se evidencia que las facturas aquí presentadas para su

¹ Radicación No. 05001-22-03-000-2020-00357-01, Magistrado ponente LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA.

² Radicación No. 11001-02-03-000-2021-00732-00, Magistrado ponente ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO.

cobro no presentan merito ejecutivo, pues contrario a lo advertido por el apoderado judicial de la parte actora, deben presentarse todos los soportes de prestación de servicios de salud que demanda en la Ley 1122 de 2007, el Decreto 4747 de 2007, la Resolución 3047 de 2008, el Decreto 56 del 2015, y el Decreto 780 de 2016 a efecto completar el título ejecutivo que será exigible por la vía judicial, ya que por sí sola el cambial, no puede ser ejecutado como un título valor autónomo. Por ende, se itera que *"...la factura que se presente por servicios de salud, para que sea considerada título valor, debe tener unos requisitos adicionales y especiales establecidos en el Decreto 4747 de 2007 y la Resolución 3047 de 2008, tales como la especificación de los bienes entregados o los servicios prestados de acuerdo a un contrato verbal o escrito, así como los respectivos soportes, toda vez que de conformidad a la Ley 1231 de 2008 (artículo 3º), que modificó el artículo 774 del Código de Comercio, si el documento que se presenta como factura no cumple con estas condiciones, el mismo carece de título valor..."*³

En ese orden de ideas, se evidencias que las facturas Nos. 4000928877, 4000931465, 4000940751, 4000941211, 4000959376, 4000983842, 4000985583, 4000988707, 4000987164, 4000988038, 4001005216, 4001010118, 4001014192, 4001029681, 4001065492, 4001074159, 4001100919, 4001101806, 4001108051, 4001109765, 4001126066, 4001131396, 4001133028, 4001134555, 4001134560, 4001136329, 4001136603, 4001136644, 4001137155, 4001142195, 4001142478, 4001147535, 4001138848, 4001138853, 4001140238, 4001142923, 4001156962, 4001169284, 4001176073, 4001176896, 4001179337, 4001192997, 4001192168, 4001201471, 4001222263, 4001222543, 4001244432, 4001248066, 4001250584, 4001411215, 4001413180, 4001414012, 4001428882, 4001438662, 4001443072, 4001462180, 4001539431, y 4001596998, no reúnen los requisitos previstos en la normatividad especial que rige las prestaciones de servicios de salud, y que atañe a los contemplados en el artículo 2.6.1.4.2.20 del Decreto 780 de 2016 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, teniendo en cuenta que los dineros que se pretende recaudar derivan de los servicios de consulta especializada brindada por la ejecutante Fundación Oftalmológica de Santander Foscal a la sociedad La Equidad Seguro Generales Organismo Cooperativo - La Equidad Generales, en virtud de la póliza otorgada por dicha aseguradora, cuyo riesgo amparado son los accidentes de tránsitos. Luego se evidencia que no se acompañó los documentos que atañen a *"...2.1. Epicrisis o resumen clínico de atención según corresponda, documento que debe contener los datos específicos señalados en los artículos 2.6.1.4.3.5 y 2.6.1.4.3.6 del presente decreto (...), y 2.2. Los documentos que soportan el contenido de la historia clínica o el resumen clínico de atención señalados en la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto..."*, de cada uno de los beneficiarios de dicha póliza, ya que solo se presentó por cada factura, una relación del número del cambial, la fecha de emisión, el nombre del usuario, identificación, nota crédito, valor factura, código de autorización y episodio.

Por lo tanto, se revocará la orden de apremio recurrida, puesto que le asiste razón a los argumentos planteados por el extremo pasivo, ya que las facturas base de ejecución deberán analizarse a la luz de la Ley 1122 de 2007, Decreto 4747 de 2007, la Resolución 3047 de 2008, el Decreto 56 del 2015, y el Decreto 780 de 2016, y no bajo los preceptos normativos del estatuto mercantil, a efecto de determinar si los cambiales reúnen las exigencias propias de los títulos ejecutivos complejos, ya que la

3 Providencia STC930-2021 del 8 de febrero de 2021, Radicación No. 11001-02-03-000-2021-00177-00, Magistrado Ponente FRANCISCO TERNERA BARRIOS.

acreencia reclamada necesita que se le acompañe de otra documental para que preste mérito ejecutivo.

En ese orden de ideas se revocará la providencia censurada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el proveído del 24 de septiembre de 2020, por las motivaciones expuestas en la parte considerativa de este auto.

SEGUNDO: NEGAR la orden de apremio como quiera que las facturas Nos. . 4000928877, 4000931465, 4000940751, 4000941211, 4000959376, 4000983842, 4000985583, 4000988707, 4000987164, 4000988038, 4001005216, 4001010118, 4001014192, 4001029681, 4001065492, 4001074159, 4001100919, 4001101806, 4001108051, 4001109765, 4001126066, 4001131396, 4001133028, 4001134555, 4001134560, 4001136329, 4001136603, 4001136644, 4001137155, 4001142195, 4001142478, 4001147535, 4001138848, 4001138853, 4001140238, 4001142923, 4001156962, 4001169284, 4001176073, 4001176896, 4001179337, 4001192997, 4001192168, 4001201471, 4001222263, 4001222543, 4001244432, 4001248066, 4001250584, 4001411215, 4001413180, 4001414012, 4001428882, 4001438662, 4001443072, 4001462180, 4001539431, y 4001596998, no reúnen los requisitos de la Ley 1122 de 2007, Decreto 4747 de 2007, la Resolución 3047 de 2008, el Decreto 56 del 2015, y el Decreto 780 de 2016.

TERCERO: Ordenar a costa de la parte ejecutante, el desglose de los documentos aportados como base de la ejecución y con las constancias respectivas hágasele entrega de ellos.

Para tal efecto, se deberá agendar cita para el ingreso a la sede judicial de acuerdo a lo previsto en la Circular DESAJBOC20-61 del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca.

CUARTO: Ordenar el archivo del expediente, previas las desanotaciones del caso.

NOTIFÍQUESE,

Firmado Por:

**MARLENE ARANDA CASTILLO
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 057 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**776d3fcbcdf9ef0675c029e7fb697eab7cd571548d78c9fb5acccb9775
50b2f1**

Documento generado en 31/05/2021 07:00:18 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**